



LAS ECONOMIAS ILEGALES EN COLOMBIA: IMPLICACIONES PARA EL POSCONFLICTO

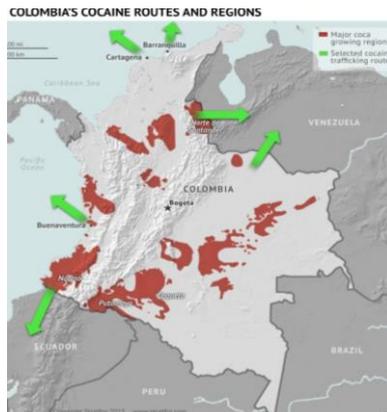
INTRODUCCION

Las amplias consecuencias del conflicto colombiano se pueden ver en todo el país, y muchas veces son casi indistinguibles de – sino lo mismo como – las igualmente amplias causas del conflicto. En una relación compleja y dinámica, las economías ilegales como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando, han contribuido y resultado de la guerra civil de los últimos 50 años. Ahora, mientras se acerca la paz, es esencial la creación de estrategias que el Gobierno de Colombia pueda usar para regular y neutralizar dichas economías ilegales cuando las FARC se desmovilicen, ya que despertará interés de otros grupos. La terminación de estas actividades ilegales es crucial para la estabilidad de la paz en Colombia, porque son la fuente principal de financiamiento para los grupos armados ilegales. Este ‘spotlight’ examina las tres economías ilegales mencionadas y sus implicaciones en el posconflicto.

EL TRAFICO DE DROGAS

Aunque el conflicto armado empezó antes de que la producción y el tráfico de drogas llegaran a ser un problema tan amplio, el aumento en esta actividad ha tenido un impacto enorme sobre el conflicto porque presta financiamiento para los grupos armados ilegales y representa una fuente de control territorial en zonas donde el Estado no ha podido mantener su autoridad. La marihuana fue la primera droga que se produjo con fines comerciales, con incrementos en su producción en los 70, seguido por la coca y la cocaína en los 80 y el opio y la heroína en los 90. Estas drogas se produjeron bajo el control de las guerrillas, los carteles y los paramilitares, y luego se exportaron a los Estados Unidos y otros mercados a través de complejas cadenas de abastecimiento y redes cuyos alcances involucraron a múltiples instituciones en Colombia y el extranjero.ⁱ

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han ganado millones de dólares ejerciendo un rol central en la economía de las drogas ilícitas en Colombia y el control de zonas grandes en el campo. Esto refleja su tercer puesto en la lista Forbes, de las organizaciones armadas ilegales más ricas del mundo.ⁱⁱ Esta publicación estimó que las FARC tiene una facturación anual de US\$600 millones (de los cuales \$500 millones vienen del



tráfico de drogas) y controla aproximadamente el 50% del mercado global de la cocaína además del 30% del territorio colombiano.ⁱⁱⁱ La desmovilización del grupo podría impactar la capacidad del Estado para controlar el territorio, y seguramente tendrá un impacto en el comercio internacional de las drogas. La profundidad del impacto dependerá de otros grupos armados ilegales y sus probables esfuerzos para tomar el control cuando las FARC salgan del panorama.^{iv}

El 16 de mayo 2014, el Gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas, el cuarto de seis puntos en la agenda de diálogos. El punto incluye tres sub-puntos: 1) la sustitución de cultivos ilícitos; 2) los programas de salud pública; y 3) la producción y comercialización de las drogas ilícitas.^v Las propuestas bajo el sub-punto 1 sobre la sustitución de cultivos incluyen: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el cual las comunidades acordarán sustituir los cultivos, y si no están de acuerdo, serán sujetas a la erradicación manual, con la posibilidad de erradicación aérea; y un grupo de trabajo conjunto, en el cual el gobierno realizará el desminado con el apoyo de las FARC en cuanto a la ubicación de las minas, entre otras funciones. Bajo el sub-punto 2 sobre la salud pública, el gobierno creará el Programa Nacional de Intervención para el Consumo de Drogas Ilícitas y el Sistema Nacional de Asistencia al Consumidor de Drogas Ilícitas entre otras iniciativas, que abordan el consumo de las drogas en Colombia. Bajo el sub-punto 3 sobre la producción de drogas ilegales, el Gobierno realizará una estrategia para romper los enlaces entre las organizaciones criminales y el sector público. Adicionalmente se crearán estrategias adicionales para combatir la corrupción, el lavado de dinero y el uso de químicos para producir drogas ilícitas.^{vi} Estas medidas buscan proporcionar una solución compartida al problema de las drogas, impactando la violencia a través de la disminución de las oportunidades de financiamiento para los grupos armados ilegales, y resolviendo los efectos laterales de la economía de las drogas, que tienen el potencial de dañar la paz. De todos modos, muchos dudan que un acuerdo de paz pueda ponerle fin a esta economía ilegal en Colombia.^{vii}

ILLEGAL MINING

La minería en Colombia es informal, y frecuentemente ocurre en áreas rurales afectadas por la baja presencia estatal y el consecuente control por los grupos armados ilegales. Aproximadamente el 60% de las operaciones mineras en Colombia son ilegales, lo cual quiere decir que no tienen



licencia y operan sin políticas claras para regular su actividad. El carbón, las esmeraldas, el oro, el coltán y otros recursos naturales son muy atractivos para los mercados nacionales e internacionales, y si bien las compañías multinacionales tienen participación en el mercado minero en Colombia, los mineros de pequeña escala producen una porción significativa. Los recursos naturales también proporcionan financiación – y en algunos casos, incentivos políticos – para los grupos armados ilegales quienes extorsionan y tienen sistemas de tributos a través de los cuales toman un ingreso fijo de productores locales. Por ejemplo, en Antioquia aproximadamente el 80% del oro producido viene de negocios informales y los grupos armados ilegales reciben entre US\$200.000 y US\$1 millón por mes de la extorsión que realizan allí.^{viii} En Quibdó, mientras que las FARC extorsionan a los productores y controlan las minas de oro en áreas rurales, las BACRIM en las zonas urbanas controlan la venta y compra de este metal.^{ix}

Cuando las FARC se desmovilicen y dejen una oportunidad para que otros grupos armados ilegales tomen control en áreas de riqueza natural, es importante que el Estado colombiano cuente con una fuerte presencia física para prevenir esta toma de control, y cuente con fuertes políticas para formalizar, legalizar y regular la minería de todo tipo. Esto no solo prevendría la financiación de los grupos armados, sino que también protegería a los productores de pequeña escala de los riesgos de las malas prácticas que provienen de la falta de regulación.^x

CONTRABANDO

Las áreas fronterizas, especialmente las de Venezuela, han sido zonas de altos niveles de actividad ilegal por organizaciones que controlan la importación y la exportación del contrabando. Los mercados de contrabando se deben en parte a los subsidios de ciertos productos básicos en Venezuela, los cuales dejan que las personas los compren localmente y los comercialicen en Colombia con un precio más elevado. Los productos más comunes en las economías de contrabando incluyen la gasolina, los cigarrillos, el alcohol y el ganado. Similar al modelo usado en la economía minera ilegal, las FARC toman un ingreso del contrabando a través de la extorsión en un sistema donde los grupos ilegales que trafican el contrabando les pagan a las FARC una tarifa.^{xi}

El Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos para acabar con el contrabando, incluyendo medidas con consecuencias carcelarias y programas de sustitución de ingresos para motivar a la gente a dejar esta economía ilegal.^{xii} Sin embargo la profundidad y la incidencia económica del contrabando es tan grande, que el reciente

cierre de la frontera por el parte de Venezuela, ha dejado a varias comunidades en La Guajira, donde se concentra el contrabando, sin ingresos.^{xiii}

Las FARC controlan una gran parte de los territorios donde el contrabando en Colombia es más fuerte, lo cual quiere decir que cuando el grupo se desmovilice, dejará un vacío de autoridad. Las BACRIM ya son parte activa en esta economía ilegal, y es por eso que el gobierno tiene que complementar la desmovilización de las FARC con esfuerzos dirigidos a acabar con el contrabando. Además, es necesario crear mecanismos alternativos de generación de ingresos en las zonas que dependen de esta actividad ilegal, para que existan menos incentivos para participar de ella.

CONCLUSION

Este spotlight ha destacado tres de las economías ilegales con las que las FARC financian su actividad. En cualquier caso, una desmovilización de las FARC dejará una brecha de autoridad y de control económico que podría asumir otro grupo armado ilegal si el Estado no actúa con celeridad a ocupar y a regular el problema. Esta forma de abordar los riesgos asociados a la transición hacia la paz tiene que ser complementada con medidas que aseguren que las comunidades que dependen de estas economías no tengan incentivos para continuar con la actividad ilegal. En los casos de producción de drogas y de contrabando, implicará la creación de alternativas para la generación de ingresos. En el caso de la minería ilegal, las comunidades deberían recibir apoyo en la legalización de sus operaciones mineras a través de un aumento en la regulación y en la formalización. En todos los casos, la forma en la que el Estado maneje la salida de las FARC de estas economías ilegales tendrá un gran impacto en el éxito de la transición hacia la paz en Colombia.



ⁱ Thoumi, F. *Illegal Drugs in Colombia*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 582, Cross-National Drug Policy (July 2002).

<http://home.sandiego.edu/~kaufmann/hnrs325/Colombia.pdf>

ⁱⁱ *The World's 10 Richest Terrorist Organizations*. Forbes International, December 2014.

<http://onforb.es/1MSzWBv>

ⁱⁱⁱ Ibid.

^{iv} *Drug trafficking and the Colombian conflict*. Insight on Conflict, May 2014.

<http://www.insightonconflict.org/2014/05/drug-trafficking-colombian-conflict/>

^v *Comunicado conjunto de las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc*. El Espectador, May 16 2014. <http://bit.ly/1FBXCav>

^{vi} *Acuerdo sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas*. Equipos de negociación gobierno y FARC. <http://bit.ly/1FBXCHF>

^{vii} Photo and citation: *In Colombia, Drug Trafficking Will Outlast A Peace Deal*. Stratfor Global Intelligence, March 18 2015. <http://bit.ly/1ENw3uu>

^{viii} Giraldo, J. And Muñoz, J.C. *Oro en Antioquia: entre lo informal, lo ilegal y lo criminal*.

Fundación Ideas para la Paz, June 2012. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/26>

^{ix} Escobedo, R. and Guio Perez, N. *Oro, crimen organizado y guerrillas en Quibdó*. Fundación Ideas para la Paz, July 2015. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1154>

^x Ibid. and Giraldo, J. And Muñoz, J.C. *Oro en Antioquia: entre lo informal, lo ilegal y lo criminal*.

Fundación Ideas para la Paz, June 2012. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/26>

^{xi} *El férreo poder de las Farc en el Catatumbo*. Verdad Abierta, March 2015.

<http://bit.ly/1M3P8Xa> and *La Guajira, azotada por bandas y Farc*. El Tiempo, May 2013.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12822622>

^{xiii} Lohmuller, M. *Colombia Approves Tough Contraband Law*. Insight Crime, June 2015.

<http://www.insightcrime.org/news-briefs/colombia-new-anti-contraband-law>

^{xiii} Lohmuller, M. "Colombia Authorities Have 'Institutionalized Contraband': Venezuela diplomat." Insight Crime, September 2015. <http://bit.ly/1XAIRPq>